(S-0479/11)

PROYECTO DE RESOLUCION

El Senado de la Nación

RESUELVE:

Citar a la Ministra de Seguridad de la Nación Dra. Nilda Celia Garré con el objeto de interpellarla, conforme artículo 71 de la Constitución Nacional, a fin de que brinde explicaciones en cuanto al desempeño de su cartera desde su creación a la fecha, y en particular respecto al bloqueo de las plantas de impresión de diarios ubicadas en la zona de Barracas, Ciudad de Buenos Aires y a la inacción de las fuerzas de seguridad y policiales en relación a los hechos ocurridos en las inmediaciones de la planta industrial “Arte Gráfico Editorial Argentino S.A.”, contra la medida cautelar dictada en fecha 21 de enero del corriente año, dictada en el marco de la causa judicial “Artes Gráficas Rioplatense S.A. c/SIRI Luis s/Amparo” que tramita ante el Juzgado Nacional de primera instancia en lo Civil N° 64, a cargo del Dr. Polo Olivera.

Juan C. Marino. - Alfredo Martinez. - Pablo Verani. - Arturo Vera. - Gerardo R. Morales. –Mario J. Cimadevilla. – Blanca M. del Valle Monllau. – Luis P. Naidenoff. –Emilio A. Rached. –

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Durante los últimos años, los legisladores hemos tenido que recordar al Poder Ejecutivo la trascendencia que el ejercicio de la libertad de expresión tiene para una democracia sana. Ello es así, porque respecto al caso que nos convoca, desde el año 2008 se han sucedido una serie de lamentables actos acallantes, expresados a través de bloqueos y otro tipo de asedios a la actividad periodística.

Así, podemos resumir la crónica diciendo que: en noviembre de 2008 se intentó bloquear las plantas de impresión de los diarios Clarín, Perfil y La Nación, por parte de militantes del gremio de camioneros, debido a un reclamo que tenía por fin el reencuadramiento sindical; peligrando la distribución de dichos ejemplares. El 13 de mayo de 2009 un grupo de camioneros evitaron el reparto de diarios y revistas. En noviembre de dicho año trabajadores del gremio de choferes de camiones bloquearon reclamando mejoras salariales. En el mes de diciembre de

2010 se vuelve a reiterar similar situación, obligando a la planta impreso en cuestión a iniciar acciones legales, expediente N° 110907/2010, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Civil N° 64.

Ya en enero del corriente año, enmarcado en la causa precitada, se solicita una medida cautelar tendiente a preservar la normal distribución del matutino que se imprime en la planta industrial Zepita de Arte Gráfico Editorial Argentino, debido a los sucesivos bloqueos, aun encontrándose en proceso dicha causa judicial. Así es que se dicta la resolución de fecha 21 de enero que admite la tutela inhibitoria ordenando "...a los demandados y/o a cualquier otra persona o agrupación de cualquier índole a abstenerse de toda conducta que importe impedir u obstruir el normal y regular ingreso y egreso de personas y de bienes..." de dicha planta industrial "...hasta tanto recaiga sentencia firme..." en esas actuaciones.

El decisorio precitado, es notificado mediante oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación en la persona de la Ministra Nilda C. Garré, debiendo la funcionaria ordenar su efectivo cumplimiento.

No sólo no dio cumplimiento a la manda judicial, sino que tampoco actuó en cumplimiento de sus funciones ante la reiteración de estos hechos, en plena vigencia de la medida cautelar antes explicada, los pasados días 26 y 27 de marzo, donde efectivamente se bloqueó la salida y posterior distribución de los ejemplares del diario Clarín, hecho tristemente histórico en nuestra vida democrática. Por primera vez, el diario no pudo llegar a sus lectores en el día de mayor circulación, un domingo, aunque no un domingo cualquiera, sino el día en el que se publicaría una nota sobre la investigación judicial que se inició sobre el patrimonio del líder de la CGT.

El pasado 27 de marzo, un diario no pudo ser leído en nuestro país, una voz no pudo ser oída y de este modo, miles de argentinos hemos sido privados de nuestro derecho de informarnos y de expresarnos.

Es lamentable tener que escribir una vez más el encuadre legal que ampara todos los derechos aquí vulnerados: muchos proyectos de esta cámara vuelven a dar testimonio de las innumerables situaciones en que este gobierno ha vulnerado, violentado, y hasta atropellado derechos tan vociferados por ellos mismos.

En este contexto, recordar que nuestra Carta Magna ampara la libertad de expresión en los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 33 y 75 inc. 22, así como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, art. 19 inc. 2º; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13, entre otros, podría ya parecer una reiteración excesiva, mas no parece serlo, pues estamos siendo testigos de cuán fácil es ignorarlo. .

La Dra. María Angélica Gelli, escribe en su libro “Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada” lo siguiente: “En particular la prensa –uno de los medios de comunicación tradicionalmente ligados a la comunicación política- cuando se expresa con libertad e independencia, contribuye a hacer visibles los problemas generados por los desaciertos del gobierno y a mostrar los excesos o desviaciones del poder y la directa relación de éstos con la mengua de los derechos.” Y sigue diciendo “La influencia de la prensa libre ha sido decisiva en la formación del juicio público y en los eventuales corrimientos de la opinión electoral, razón por la cual suele generar resistencias y presiones gubernamentales y, en determinadas circunstancias, de los intereses sociales contrariados por la información y la crítica.”

Por su parte, diversas entidades y personalidades vinculadas al periodismo y a la vida política han manifestado su repudio a este tipo de acciones. Tal lo expresado por FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) mediante un comunicado, diciendo que “Esto configuró un grave ataque a la libertad de expresión.” La Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas exhortó a los distintos sectores a guardar la racionalidad y la mesura en el uso de la fuerza. El director de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti también calificó el bloqueo como “una flagrante violación a la libertad de prensa”. El diario español “El País” ha publicado esta noticia, así como “El Mundo”. El propio gobernador de la provincia de Buenos Aires consideró que “perjudica la convivencia democrática” y es “una muestra de intolerancia”. De modo similar se manifestaron periodistas como Lanata, Ruiz Guiñazú, Castro, entre otros.

No menos trascendente es detenerse en los considerandos del decreto 1993/2010 que crea el Ministerio de Seguridad. Es plausible en dicho texto la intención del gobierno nacional de velar por la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes. Tanto así que podemos transcribir textuales palabras de uno de dichos considerandos, que dice “... y considerando la trascendencia que la seguridad interior representa para la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático, configurando un instrumento indispensable para el bienestar individual y colectivo, desempeñando así un rol fundamental para el desarrollo del país en su conjunto, hace necesaria la creación de un área que profundice la temática sobre el particular.”

Y sigue diciendo el decreto aludido “Que esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno, y es entonces del caso, recurrir al remedio constitucional establecido en el inciso 3 del artículo 99 de la

Constitución Nacional, en el marco del uso de las facultades regladas en la ley 26.122.”

El Poder Ejecutivo propició el remedio por vía de decreto, justificando su uso en pos de la celeridad que el tema de la inseguridad amerita, y luego en la práctica dilata hasta el presente la resolución de un problema que implica la flagrante violación a un derecho fundamental de la sociedad en su conjunto.

Es dable destacar la disparidad existente entre las motivaciones del decreto presidencial dictado el 14 de diciembre de 2010, y la inacción de la Ministra de Seguridad encargada especialmente de preservar estos derechos y de hacer cumplir una orden judicial.

Debemos dar el más categórico rechazo a la existencia de este tipo de actos, y ante la gravedad de los hechos proponemos hacer uso de la herramienta constitucional que prevé el art. 71 de la Constitución Nacional y en efecto convocar a la Sra. Ministra de Seguridad Nilda Garre para que brinde a este cuerpo las explicaciones del caso. Es por ello que solicitamos a nuestros pares que acompañen esta iniciativa.

.

Juan C. Marino. - Alfredo Martinez. - Pablo Verani. - Arturo Vera. - Gerardo R. Morales. –Mario J. Cimadevilla. – Blanca M. del Valle Monllau. – Luis P. Naidenoff. –Emilio A. Rached. -